DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN ARAGÓN

(PRIMER SEMESTRE 2020)¹

OLGA HERRÁIZ SERRANO

Letrada de las Cortes de Aragón

*Profesora Asociada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de
Zaragoza*

¹ El presente trabajo se incluye dentro de las actividades del Grupo consolidado de investigación ADESTER (Estudios Territoriales), reconocido por el Gobierno de Aragón (BOA núm. 48, de 20 de abril de 2005).

Sumario: 1. Introducción. 2. Legislación. 3. Organización. 4. Otras disposiciones. 5. Medidas de fomento de carácter ambiental.

1. INTRODUCCIÓN

Inevitablemente la crónica de la política ambiental aragonesa durante el primer semestre de 2020 viene marcada por la realidad de la pandemia internacional a que la Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. El Gobierno de España declaró el estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desarrollado profusamente en los días posteriores con objeto de concretar las medidas adoptadas, coordinar las acciones de las Administraciones públicas y garantizar su eficacia. Y dicho estado de alarma fue prorrogado en cuatro ocasiones hasta el momento de cerrar la presente crónica, y previsiblemente tendrá que seguir prorrogándose, aunque, en las próximas semanas, conforme el descenso en las cifras de fallecidos y contagios lo permita, se sigan modulando algunas de las medidas más restrictivas a fin de comenzar lo que se ha dado en llamar proceso de desescalada y de transición gradual hacia una nueva normalidad.

En Aragón, el Gobierno aprobó el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma (BOA 25 marzo), que fue convalidado mediante Resolución de las Cortes de Aragón de 15 de abril. Con aquella disposición de urgencia, el ejecutivo aragonés se limitó a adoptar las medidas indispensables para organizar de forma adecuada la acción de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de su territorio en el marco de la normativa estatal y de las decisiones adoptadas por el Gobierno de España como autoridad competente a los efectos del estado de alarma.

Nos limitaremos a reseñar aquí las que han marcado la política ambiental aragonesa de este período. Así, el artículo 7 del Decreto-Ley 1/2020, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró suspendidos los plazos de cualesquiera procedimientos ambientales en tramitación, salvo de los indispensables para la protección del interés general o el funcionamiento básico de los servicios. El citado Decreto-Ley reiteró también para Aragón la aplicación de la tramitación de emergencia en los contratos que tuvieran que celebrar la Administración ambiental autonómica o las entidades locales y dispuso de medidas específicas para la aplicación del régimen de suspensión de los restantes contratos previsto en la normativa estatal. También estableció la posibilidad de anticipar la totalidad del importe de las ayudas concedidas a los beneficiarios que acreditasen la existencia de pérdidas de actividad provenientes de una situación de fuerza mayor derivada del COVID-19. A su vez, contempló la posibilidad de tramitar subvenciones que eran nominativas en 2020 como plurianuales (art. 34 Decreto-Ley 1/2020), y suprimió la obligación del mantenimiento del empleo y los puestos de trabajo para el otorgamiento de subvenciones y ayudas a empresas.

Sea como fuera, la crisis sanitaria ha obligado a retrasar la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) para desgajarlo en una tasa y un impuesto, en la que el ejecutivo autonómico llevaba trabajando desde el mes de octubre, así como la nueva Mesa de Diálogo del Agua, anunciada por el Presidente de la Comunidad a principios de febrero, semanas antes de que estallase la pandemia, para redefinir el Pacto del Agua y revisar el proyecto de embalse de Biscarrués.

No obstante, lo anterior, en las rúbricas que siguen, reseñaremos lo más importante de la política ambiental autonómica en los escasos meses de “normalidad” a que va referida la presente crónica, anteriores a la declaración de la pandemia.

2. LEGISLACIÓN

Si, en el Plan General de Caza para la temporada 2019-2020, que fue aprobado por Orden DRS/632/2019, de 27 de mayo (BOA 14 junio), ya se establecieron medidas extraordinarias para el control de la proliferación de conejos en 118

municipios de la Comunidad Autónoma que aparecían relacionados en su Anexo II, pocos meses después, la situación había dado lugar a daños tan desproporcionados sobre los cultivos agrícolas y sobre otras especies de animales silvestres con los que comparten su hábitat y a los que privan de parte de su alimento que el Gobierno de Aragón se vio obligado a aprobar una disposición de urgencia. Nos referimos al Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo común (*Oryctolagus cuniculus*) en Aragón (BOA 11 octubre), que fue convalidado por Resolución de las Cortes de Aragón de 21 de noviembre (BOA 2 diciembre).

El decreto-ley concedía un plazo de 30 días para que los titulares de los cotos adoptasen un “Plan de medidas de intensificación de la caza del conejo” que debían presentar ante la administración como declaración responsable, o para que solicitasen al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que interviniese, a través de la Federación Aragonesa de Caza, tanto en los cotos como en los terrenos no cinegéticos mediante cazadores habilitados con el propósito de intensificar la caza del conejo. En consonancia con ello, la mencionada disposición de rango legal autorizaba a los ayuntamientos de los municipios incluidos en su ámbito de aplicación a solicitar de la Federación Aragonesa de Caza el envío de cazadores habilitados para el control poblacional del conejo y, asimismo, habilitaba a los consistorios para expedir a esos cazadores las autorizaciones concretas de caza tanto en terrenos cinegéticos como en los no cinegéticos.

En cuanto a las novedades referidas a las modalidades cinegéticas que podían emplearse para la caza del conejo, el Decreto-Ley 9/2019 eliminó la necesidad de disponer de una autorización especial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para la tenencia de hurones destinados a ese fin; permitió la caza del conejo en madriguera a la espera; obligaba a la utilización de focos de luz artificial en la caza nocturna del conejo para aumentar la eficacia de esta y la seguridad en el disparo y, tanto en terrenos cinegéticos como no cinegéticos, autorizó la captura en vivo de conejos durante todo el año sin necesidad de disponer de licencia de caza. Por último, obligó a que los planes técnicos y planes de aprovechamiento cinegético de los cotos incluidos en los municipios

afectados permitiesen que todos los socios o cazadores miembros del coto pudiesen cazar el conejo durante todos los días del año mediante cualquiera de las modalidades de caza y captura permitidas en cada fecha concreta.

3. ORGANIZACIÓN

En nuestra crónica referida a la política ambiental aragonesa del semestre anterior, dimos cuenta, como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y del Gobierno surgido de las urnas, de la nueva denominación dada al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad como Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Definimos la estructura de este a partir de tres disposiciones normativas: el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos; el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Orden de 29 de agosto de 2019, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se determinan las competencias que asumen transitoriamente los órganos directivos del Departamento.

Pues bien, los numerosos cambios introducidos han hecho necesaria la aprobación de un texto consolidado nuevo, como Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (BOA 3 marzo), que deroga el Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, así como las variadas modificaciones introducidas en el mismo con posterioridad. Se confirma así la estructura de la que ya dimos cuenta y en la que son tres las direcciones generales que concentran la gestión ambiental en la Administración autonómica (la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental), junto a las dos entidades de derecho público adscritas a la consejería, el Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Así, a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria corresponden, entre otras tareas, “la vigilancia y control de las fuentes generadoras de contaminación, en particular sobre la producción, traslado y gestión de residuos, las emisiones a la atmósfera y las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, la coordinación y supervisión de la actividad inspectora en materia de calidad ambiental con los Servicios Provinciales del Departamento, así como la coordinación de las comprobaciones y devoluciones de garantías financieras de las explotaciones mineras”. Igualmente, por lo que a las políticas ambientales se refiere, “le corresponde la planificación, coordinación, conservación y supervisión de la gestión de los recursos cinegéticos y piscícolas y la elaboración de los planes autonómicos en materia de caza y pesca; la gestión en materia de aprovechamientos cinegéticos en los cotos sociales y las reservas de caza y de pesca continental” (art. 20).

Respecto de la segunda dirección general citada, “corresponde a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal la conservación de la biodiversidad, de los espacios protegidos y de la flora y la fauna silvestres, así como la adopción de medidas adicionales de protección de los ecosistemas acuáticos; la dirección, la planificación, la coordinación y la supervisión de la política forestal y, en particular, la elaboración de instrumentos de planificación; la gestión forestal sostenible; la valorización de los recursos forestales; la defensa de la propiedad pública forestal y de las vías pecuarias; el estudio, protección y recuperación de los espacios forestales y sus hábitats con especial atención a la salud de los bosques. Asimismo le corresponde, la planificación, coordinación y gestión en materia de incendios forestales, en particular, las actuaciones de carácter preventivo sobre el territorio y la sensibilización social, así como el análisis y la gestión de las actuaciones de extinción y la innovación y desarrollo de tecnologías para la preservación de la superficie forestal, la planificación y coordinación de la ejecución de la programación de desarrollo rural integrada en la Política Agraria Común en sus medidas forestales y la gestión de la formación y capacitación profesional desarrollada a través del Instituto de Formación Agroambiental” (art. 30).

Finalmente, son competencias de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental “la dirección, planificación, coordinación y supervisión de

los planes y programas en materia de fomento de la calidad del medio ambiente, contaminación atmosférica y de la calidad del aire, suelos contaminados, residuos, contaminación acústica y la prevención de impactos asociados a las actividades con repercusión en la calidad ambiental”; “el impulso y la coordinación en el desarrollo de las acciones en materia de educación ambiental y de cambio climático y la gestión de las operaciones de valorización o eliminación de residuos declaradas servicio público de titularidad autonómica” (art. 35).

4. OTRAS DISPOSICIONES

Por lo que respecta a la regulación de los órganos de participación de los espacios naturales protegidos declarados en Aragón, fue objeto de modificación mediante el Decreto 212/2019, de 22 de octubre (BOA 30 octubre). Los cambios consisten en incorporar una persona en representación de la Federación Aragonesa de Caza en cada uno de los Patronatos de los espacios naturales protegidos y en extender la presencia de la Federación Aragonesa de Montañismo al conjunto de todos ellos.

Finalmente, del semestre analizado, reseñaremos la Orden AGM/139/2020, de 10 de febrero, por la que se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016 (BOA 28 febrero). El Departamento reconoce estar procediendo a armonizar la regulación de las épocas de peligro, el uso del fuego y las actividades que entrañan riesgo de generación de incendios forestales que prevé el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón (Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio), con arreglo a las nuevas tecnologías y conocimientos existentes, y teniendo en cuenta el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO), que fue aprobado por Decreto 167/2018, de 9 de octubre.

Hasta tanto concluya dicho proceso de armonización en una nueva Orden sobre prevención y lucha contra los incendios forestales, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente acordó prorrogar la Orden de la campaña 2015/2016.

5. MEDIDAS DE FOMENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL

- Orden AGM/1478/2019, de 28 de octubre, por la que se convocan subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020, para el año 2019 (BOA 15 noviembre).
- Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020 (BOA 12 diciembre).
- Orden AGM/1679/2019, de 4 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones Leader para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2020 (BOA 20 diciembre).
- Orden AGM/1724/2019, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales durante el año 2020, que gestionará el Instituto Aragonés del Agua (BOA 27 diciembre).
- Orden AGM/1768/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020 (BOA 7 enero).
- Orden AGM/1769/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020 (BOA 7 enero).
- Orden AGM/1770/2019, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2020 (BOA 7 enero).

- Orden AGM/241/2020, de 10 de marzo, por la que se convoca el Premio Aragón Medio Ambiente, para el año 2020 (BOA 23 marzo).